



VOL: AÑO 7, NUMERO 19

FECHA: MAYO-AGOSTO 1992

TEMA: DEMOCRACIA Y NEOLIBERALISMO: Perspectivas desde América Latina

TITULO: **Empresarios en Brasil y México: Un ensayo sobre el neoliberalismo en América Latina**

AUTOR: *Rafael Montesinos* [\*]

SECCION: Artículos

## RESUMEN:

Partiendo de las diferencias entre las culturas políticas que determinan la presencia o ausencia de los militares en el escenario político de Brasil y México. el objetivo de este trabajo es identificar las características de los procesos sociales a partir de los cuales se pone punto final al modelo de desarrollo "populista" del período posbélico. De manera muy específica se finca la atención en el papel que juega el empresariado en la instalación del nuevo modelo de desarrollo de corte neoliberal, en el cual ese sector de la sociedad se va fortaleciendo en la medida en que la economía va predominando sobre la política, la sociedad y la cultura.

## ABSTRACT:

Employers in Brazil and Mexico: an essay on the Neoliberalism in Latin America.

Considering the differences in the political culture that determine the presence or absence of the military in the political scene of Mexico and Brazil, the objective of this work is to identify the features of the social processes from which is set the final point to the "populist" model of development of the postwar period.

In a very specific way, the attention is focused on the rol that the employers play in the instalation of a new model of development of neoliberal kind in which this sector of the society is strenghtening the economy and is prevailing over the politics, the society and the culture.

## TEXTO

### I. El neoliberalismo en América Latina

El ascenso de las dictaduras militares, que comenzó con el golpe militar de 1964 en Brasil y que se generalizó en la década de los años setenta representó la influencia del proceso de rechazación que a nivel internacional vivió el mundo en las últimas décadas y que culminó con el derrumbe del "socialismo real", al desarticularse la Unión Soviética en diciembre de 1991. El fin de la guerra fría que se confirma a finales de los años ochenta, denota el predominio de la ideología "occidental". De tal manera que hoy el paradigma neoliberal marca el rumbo que han de seguir las sociedades, sobre todo, que no tienen injerencia en la redefinición del orden internacional; es el caso de los países de América Latina.

La militarización de las sociedades latinoamericanas marcó el fin de un modelo de desarrollo socioeconómico en el que el papel del Estado fue fundamental en la conducción global de la sociedad. Esta característica respondió a la propuesta keynesiana que en el plano de la economía intentó dar solución a la crisis capitalista de los años 1929-1930 y que influyó de manera determinante en la acción de los Estados latinoamericanos que impulsaron los diferentes procesos de industrialización iniciados incipientemente en esos años. Desde ese momento se le asignó al Estado la capacidad de intervenir directamente en la economía, situación que contraponía los postulados de los economistas liberales clásicos (Smith y Ricardo) en los que se otorga al Estado un papel pasivo en la economía para posibilitar el libre juego de las fuerzas del mercado. Esto se refleja, también, en las interpretaciones de Engels, en las que el Estado capitalista aparece como el elemento social que ha de garantizar las condiciones externas de la producción.

Por otra parte, el ascenso de los militares en el escenario político latinoamericano de los años sesenta, responde a los conflictos políticos entre las principales clases sociales, empresarios y obreros, que generaron el crecimiento sostenido del 5% en promedio anual, del proceso de industrialización (proceso de sustitución de importaciones 1940-1960). El agotamiento de un modelo de desarrollo "populista", con un Estado benefactor que responde a la especificidad de la cultura política latinoamericana; el fortalecimiento de la izquierda en los años sesenta, a partir del triunfo de la Revolución Cubana; en general la nueva conformación del orden internacional que imponía nuevas relaciones económicas entre los países en "vías de desarrollo" y los países industrializados, crearon un ambiente de caos [1] que justificó ideológicamente la irrupción de los militares en la escena política.

Si bien lo inmediato fue imponer un estado de emergencia, los cambios cuantitativos y cualitativos que modificaron la relación entre el Estado y la sociedad, la relación entre las clases mismas, la economía interna con la externa, el papel del capital foráneo, etcétera, se reflejan de inmediato en el terreno de la economía. La instalación de un nuevo modelo de acumulación que planteó el reordenamiento de las relaciones de producción, fue teniendo paulatinamente (el ritmo dependió del caso específico del que se trate) su efecto en el resto de las relaciones sociales, [2] en el espacio sociopolítico. Esta situación obliga a definir las características concretas que permitieron identificar la instalación de un nuevo proyecto de desarrollo en las sociedades latinoamericanas y que se traduce en inducir nuevamente las economías hacia afuera.

El nuevo proyecto apuntó, entonces, a resolver la grave situación económica, reflejada en índices inflacionarios de tres dígitos, y la movilización política que esto venía provocando justificó la irrupción de regímenes autoritarios que comenzaron a implementar, en lo económico, medidas de corte neoliberal. En general, esto contempla: 1) la reducción de los gastos gubernamentales, 2) la disminución de la oferta monetaria, 3) la liberación de los precios, 4) la apertura de la economía (fin del proteccionismo que caracterizó el proceso de industrialización del período posbélico), y 5) la exclusión de las demandas salariales. Es decir, que con la llegada de los militares al poder se sentaban las bases de un nuevo sistema social en el que las condiciones del mercado predominan sobre los otros ámbitos de la sociedad: lo político, lo ideológico y lo cultural. De tal manera que los agentes económicos se van atomizando, comenzando un proceso social en el que los sindicatos ven erosionada su función social y política (French-Davis, 1988: 41).

Los programas que se instalan a partir de los años sesenta y setenta ponen mayor atención en los cambios estructurales que en los superestructurales. La alternativa define como objetivo primordial la modernización económica. En ese sentido, inicia la transición de un modelo de desarrollo "populista", en el que el Estado desempeña un papel

fundamental a uno de carácter neoliberal, en el que se imponen las condiciones del mercado al resto de los ámbitos sociales.

El repliegue del Estado, que refleja la modificación de la relación con la sociedad civil, viene acompañado de la centralización del poder en las diferentes juntas militares que derrocaron a los gobiernos civiles. Como lo sugiere Foxley, [3] para tratar el problema del proyecto neoliberal en América Latina es necesario considerar que los experimentos latinoamericanos no responden necesariamente de manera «pura» a las recomendaciones monetaristas de la Escuela de Chicago. En ese sentido, es conveniente reconocer que el neoliberalismo latinoamericano puede ser diferenciado por la aplicación ortodoxa de las propuestas neoliberales (por ejemplo, el caso de Chile) y la resolución heterodoxa (como es el caso de Brasil, Argentina y Uruguay); más aun, es necesario contemplar el caso mexicano que, por un lado, representa un caso atípico al no recurrir a la fuerza militar, pero en el que a la vez, la aplicación del modelo neoliberal se da tardíamente, en relación a los otros casos latinoamericanos, de manera prácticamente ortodoxa. Por lo que toca a nuestro objetivo, ubicaremos las características del proceso brasileño que inicia con el golpe militar de 1964. Respecto al caso mexicano consideraremos el proceso "pacífico" de instalación progresiva del proyecto neoliberal en el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988).

Es necesario considerar, para el caso de América Latina, que en los años setenta el panorama resulta favorable a la corriente monetarista (neoliberal) que contendía con la estructuralista en la elaboración de estrategias económicas para enfrentar los problemas del subdesarrollo. [4] De tal manera que en esa década el paradigma neoliberal comienza a predominar entre las élites dirigentes de las sociedades latinoamericanas: poco a poco, la idea del mercado se va imponiendo sobre la idea de lo social. Lo económico va predominando sobre lo político y lo social. De tal manera que la nueva relación social que existe a partir del nuevo modelo de desarrollo replantea el lugar que le corresponde a cada uno de los actores sociales. En ese sentido es importante identificar que el ascenso de los militares al poder responde a la inestabilidad social provocada por el enfrentamiento de intereses antagónicos entre las principales clases sociales: empresarios y obreros (burguesía-proletarios). De tal manera que en lo subsiguiente, a partir de la instalación del proyecto neoliberal se pone fin al Estado "populista", y por tanto, se le va restando relevancia política a los trabajadores en el desarrollo de las sociedades latinoamericanas.

En ese contexto, de exclusión de específicos actores sociales en la toma de decisiones, resulta conveniente identificar que en la lógica de los procesos latinoamericanos, la instalación del proyecto neoliberal va íntimamente ligada a la instalación de un gobierno autoritario. El predominio de los «intereses» del mercado sobre los Intereses globales de esas sociedades se traduce en un evidente respaldo de los intereses del capital local y foráneo, puesto que se trata de garantizar los intereses inmediatos de los empresarios sobre los intereses de las clases subalternas. Esto se va demostrando con la aplicación de las políticas neoliberales, en la medida en que define como objetivo primordial la estabilización de la crisis económica en el corto plazo inevitablemente afecta en lo inmediato a las capas sociales subalternas a la clase empresarial. De hecho, la aplicación de la política neoliberal, póngase el ejemplo de la reducción del gasto público que afecta directa e inmediatamente a las clases trabajadoras, exige la eliminación o reducción de los derechos de grandes masas de la sociedad. En ese sentido, la democracia se restringe o se aplaza según sea el caso del que se trate. En términos generales el Estado autoritario que imponen las dictaduras militares representa la base que permite la aplicación ortodoxa del proyecto neoliberal. Los cambios que promueve la política económica de dicho corte proponen la transformación radical de la economía, modificando las estructuras a partir de características que anteriormente hemos señalado, [5] pero

sobre todo, y este es el objetivo que persigue analizar este ensayo, redefine la injerencia de la empresa privada frente a las organizaciones laborales en las instancias decisorias (Foxley, 1988:24). Es decir, que lo importante de este proceso de cambio del modelo de desarrollo está concentrado en el papel que juegan los empresarios, fundamentalmente en lo político, en la instalación de dicho proyecto. En ese sentido, es importante recordar que intentar captar la dinámica de estos procesos en las sociedades latinoamericanas exige trascender el ámbito "puro" de la economía, para contemplar en un sentido mucho más amplio, en lo político y lo social, lo que ahí aconteció. Como lo señala Foxley:

Una pérdida de dinamismo del proceso de crecimiento en la fase inmediatamente anterior va acompañada de inflación en aumento y de inestabilidad económica. Ello conduce a una crisis de confianza en el sistema, por parte tanto de los protagonistas internos claves (trabajadores, empresarios) como de inversionistas foráneos. Los factores políticos están presentes también. La movilización de sectores populares y el poderío que alcanzan las organizaciones sindicales hacen surgir en los círculos empresariales y, más tarde, también en las fuerzas armadas una sensación de que el orden establecido se encuentra amenazado. La existencia de un sistema político abierto y competitivo permite que estas fuerzas en pugna choquen (Foxley, 1988: 26).

Pero Independientemente de la cultura política en Brasil y México que determina la presencia o ausencia de los militares en el escenario político, tanto el proceso mexicano como el brasileño (en la especificidad de su cultura política) siguen la ruta neoliberal por más que se aplique una política social para restringir los efectos negativos en los sectores de extrema pobreza. El carácter neoliberal del modelo de desarrollo en Brasil y México es reconocido en amplios sectores académicos e intelectuales nacionales; como también lo es en el extranjero; así lo demuestra el siguiente comentario:

En los años cincuenta cuando el economista Raúl Prebisch dirigía el Comité Económico para América Latina en la ONU. estaba de moda atribuir el subdesarrollo -no solamente de América Latina sino también del Tercer Mundo al sistema capitalista en su conjunto. Se señalaba que los primeros empresarios del desarrollo en Europa y Estados Unidos habían, en efecto, estructurado la economía mundial a su favor, condenando al mismo tiempo, a aquellos que venían después con posiciones dependientes de proveedores de materias primas. Al inicio de los años noventa esta visión de las cosas cambió totalmente: los presidentes Carlos Salinas de Gortari de México, Menem de Argentina y Fernando Collor de Melo de Brasil buscarán realizar vastos programas de liberalización económica después de llegar al poder, aceptando la necesidad de las leyes del mercado y la apertura a la economía mundial (Fukuyama, 1992: 67).

Después de plantear lo que a nuestro juicio son las principales características del proyecto neoliberal en América Latina, sobre todo en las implicaciones político-sociales, pasamos a exponer la dinámica de cada uno de los procesos que en este trabajo llaman nuestra atención.

## II. Los empresarios y el proyecto neoliberal en Brasil. Un caso tipo

### a) La emergencia del régimen autoritario

En el contexto de un sistema político corporativista, los empresarios brasileños incidieron en el escenario político subordinados a las directrices que marcaba el Estado. De esa manera, negociando con la burocracia garantizaron su acceso a los campos estratégicos en los que defendieron directamente sus intereses concretos de clase. En el período 1950 -1960, que se ubica en una etapa de relativo auge en el proceso de sustitución de importaciones, los empresarios brasileños lograron fortalecer su presencia política a

través de la FIESP (Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo), organización cúpula que rebasó el papel de la CNI (Confederación Nacional de la Industria) que anteriormente representó la organización empresarial de mayor importancia en el Brasil.

El aspecto relevante en cuanto al papel que jugaron los empresarios en el modelo de desarrollo populista del período posbélico, es que su proyecto de industrialización contemplaba la intervención directa del Estado en la economía. Es decir, que los empresarios reconocían la importancia del Estado en el desarrollo económico de la nación. Al invertir en las áreas de alto riesgo en las que los empresarios no estuvieran dispuestos a hacerlo, también habría de disminuir las desventajas que provocó la incorporación tardía al capitalismo (Diniz y Boschi, 1988: 308). De tal forma que la intervención estatal era concebida como la acción más idónea para garantizar la inserción de la economía nacional en la división internacional del trabajo.

El gobierno de Goulart que cayó en 1964 representó el último esfuerzo del Estado populista por mantener una política nacionalista. La fuerte movilización social que caracterizó la década de los años cincuenta, encontró en este gobierno el respaldo suficiente para que sus demandas legítimas no provocaran la represión patronal directa. Pero de cualquier forma, el "desorden" propiciado por el populismo de Goulart produjo el malestar de los empresarios brasileños puesto que los logros de los trabajadores de las empresas del Estado eran traspasados a los trabajadores de las empresas privadas, afectando así los intereses concretos del capital.

La movilización de las clases medias y las masas trabajadoras impedían la libre expansión del capitalismo. Por otra parte, Goulart intentaba fortalecer su política nacionalista a partir de: 1) controlar las transferencias de capital al exterior, 2) crear una ley para impulsar la Reforma Agraria, 3) mantener relaciones con Cuba, 4) no ejercer la represión en contra de las masas populares y 5) resguardar la libertad de expresión. De tal manera que el golpe militar perpetrado en 1964 representó la intención de los altos mandos militares y las élites empresariales de establecer un nuevo orden que garantizara la reproducción ampliada del capital, como se señala a continuación:

Lo que más nos interesa aquí, con todo, es verificar que el modelo estatal-paternalista se contraponía al enraizamiento de ideologías promotoras de la integración empresarial, que incluyeran: una visión liberal-democrática que valorizase al individuo y el esfuerzo individual; la imagen de la empresa como fuente de prosperidad material y ámbito por excelencia del ascenso social; y una ideología de la racionalidad capitalista dentro de la empresa (como el fordismo y el taylorismo) que vinculase los beneficios individuales a la cooperación voluntaria en el proceso integral de la producción (Castro, 1985, 379).

El golpe militar de 1964 que planteó la expansión del capitalismo evidentemente contó con el apoyo indiscutible de las élites empresariales, en la medida en que sus intereses de clase quedarán resguardados en el nuevo modelo político, económico y social. Desde ese momento, los empresarios diversificaron su acción política ampliando su presencia en el ámbito estatal y en el social. Crean un sistema de doble representación de intereses donde, por un lado, utilizan la estructura corporativa heredada de la "República Populista" (1945-1964), mientras que, por otro lado, fundan organizaciones paralelas a las corporativas con autonomía frente al Estado. Esta situación garantiza la presencia de los intereses empresariales en el seno del Estado (Diniz y Boschi, 1988:309).

En ese sentido, el objetivo del golpe militar en el plano político social es el de propiciar la desmovilización social, imponer un estado de excepción, que restablezca el orden e inicie un proceso de modernización económica que coadyuve a recuperar los niveles de crecimiento del período posbélico. El nuevo orden social impuesto por la alianza

empresario-militar al intentar garantizar la expansión del capitalismo impone como objeto de la nación la modernización económica sobre los derechos civiles de la sociedad brasileña. La oposición es exterminada, se destruye el sistema de partidos, se reprime a las masas, se implanta el régimen autoritario que en primera instancia irrumpe con el respaldo de la fuerza militar. El golpe militar rebasa los objetivos de seguridad y desarrollo que contextualizaron la militarización de América Latina en el marco de la «guerra fría». Representa la necesidad de garantizar la reproducción del capitalismo dependiente brasileño; por tanto constituye la estrategia político-militar para derrotar a los enemigos internos: masas trabajadoras, intelectuales de oposición, pequeñas burguesías arruinadas, etc. Por su parte, los empresarios no delegaron su responsabilidad en los militares; su presencia en el IPES refleja su acción directa en la conducción y formación del escenario político. La presencia en el bloque dominante del binomio empresario-militar, se manifestó en el hecho de que los puestos claves ministeriales los ocuparon representantes del gran capital nacional asociado al capital norteamericano. De igual forma, militares ocuparon altos cargos ejecutivos en las grandes empresas transnacionales (Bambirra, 1990: 254).

Pero aun considerando que el nuevo Estado autoritario se sostiene por la fuerza material de los militares, como lo señalan Bambirra, Castro y Cardoso, no es posible afirmar tajantemente que el régimen se mantiene exclusivamente por medio de la fuerza. Esta representa un elemento que, por importante que sea, no ha de imposibilitar distinguir el discurso democratizante del Estado. Es necesario entender la forma en que el bloque dominante intentó legitimarse en el poder por la vía de la recuperación del consenso. Por lo que toca a los militares, la política social (PS) del gobierno refleja la intención de esta fracción de evitar lo más que sea posible el ejercicio de la violencia. Aunque el nuevo régimen impidió la participación política de las masas, se propició su vinculación con el Estado mediante la política social. Si la clase trabajadora quedaba excluida de la toma de decisiones y esto provocaba desestabilización, la política social intenta restituir cierto margen de estabilidad.

Por su parte, los empresarios actúan políticamente atrayendo a las masas subalternas mediante el Instituto de Pesquisas Sociais (IPES) que tuvo la función de administrar los fondos destinados a la política social. Es decir, que el nuevo régimen empresario-militar se propuso la cooptación como forma indispensable para controlar el proceso brasileño.

La importancia política de la PS es que en la medida en que se propicia la adhesión de las masas populares al nuevo modelo de acumulación, el resultado promueve el apoyo del sector empresarial. Aquí ya no se censura al populismo en su versión autoritaria, puesto que ya no provoca el efecto de confrontación de la política asistencialista de Goulart. De hecho, en la lógica del nuevo orden social, en un contexto de excesiva oferta de fuerza de trabajo, el empresariado dispone arbitrariamente de la planta de empleo, situación que los trabajadores en ese momento no pueden revertir por la derrota del movimiento popular en 1964.

#### b) La ofensiva antiestatista de los empresarios

En Brasil, el gobierno militar fue el que creó la mayor parte de las empresas paraestatales; aun así, los empresarios no se quejaron mientras duró el milagro brasileño (1967-1973). Cuando la crisis del sistema capitalista internacional afectó el desarrollo obtenido desde 1964, se generó una corriente antiestatista en el interior del empresariado. La efervescencia social de finales de los años sesenta así como los triunfos electorales de la oposición que obligó al Estado a anular la constitución en 1969, fueron los primeros elementos de la crisis política del régimen autoritario, que se consolidó en el momento en que los empresarios desataron una campaña antiestatista. Tal fue el impacto de esta

confrontación; posteriormente en los años ochenta, el problema de la privatización aparecería constantemente en el discurso presidencial y en general en el discurso oficial. La situación política empeora cuando el gobierno pierde el apoyo electoral en las elecciones de 1974.

De cualquier manera la llegada al poder del general Geisel en 1974, representa la recuperación del control del gobierno por parte de la fracción militar. Se expulsan las actividades de inteligencia para restablecer el prestigio de los militares, aunque continúa la eliminación de las elecciones secretas y directas para gobernadores estatales. Es hasta 1978 cuando se restituye el derecho a elecciones para gobernadores estatales. La modificación de las reglas del juego provocó una respuesta terrorista contra los líderes de oposición, el dilema que enfrentó Geisel se dividía entre el riesgo de perder la autoridad sobre la burocracia militar o perder el control sobre el proceso de liberación, que se extendía hasta el gobierno de Figueiredo planteando: 1) el abandono gradual de la represión (restitución de los derechos civiles), 2) la apertura política que permitió la amnistía, y 3) el condicionamiento de la libertad de expresión, restringiendo la opinión pública a los medios de comunicación pro-gubernamentales, que, controlados por el poder económico, moldearon la opinión en función de los intereses del gran capital. En ese contexto de recomposición política se dio la ofensiva empresarial en contra del régimen autoritario del que si bien formaba parte, la conducción de la tecnocracia había afectado, en general, los logros económicos a finales de los años sesenta.

En septiembre de 1975 la FIESP publicó un documento llamado "El proceso de estatización de la economía brasileña". Así, las élites empresariales manifestaron su malestar en contra del estatismo. Algunos meses más tarde, ante la fuerte presión empresarial el gobierno abrió el debate sobre el problema de la estatización. La intervención del Estado en la economía era visto por los empresarios como la causa del alto déficit presupuestario. Lo significativo de este proceso es que los empresarios brasileños comenzaron a formar una opinión pública que consolidó la crítica hacia el Estado interventor. Evidentemente, las empresas paraestatales fungen como el elemento principal de la política económica. En su intención por contener la inflación a principios de los años setenta el gobierno decidió comprimir la tarifa de precios de los productos y servicios que ofrecían sus empresas. Es el caso de los productos siderúrgicos, que entre enero de 1979 y diciembre de 1984, redujeron sus precios en un 50%, la tarifa de la energía eléctrica descendió en un 40%, así como la tarifa telefónica mostró una reducción de un 60% en ese mismo período (Velasco, 1988: 299).

Aunque esta situación refleje la transferencia de valor al sector privado nacional y extranjero, la intervención del Estado en las demás actividades económicas provocó la satanización del papel de las industrias paraestatales. Al ser consideradas como una forma de competencia desleal que hace el gobierno en contra de la empresa privada, los ataques dirigidos desde el sector empresarial tuvieron como blanco general el intervencionismo estatal. El objetivo primordial era fortalecer el papel de la empresa privada nacional en el desarrollo económico. Tal es el grado que alcanza el conflicto de la estatización de la economía que Figueiredo, quien sustituye a Geisel, incorpora en su discurso el problema de la estatización. En su gobierno se crea la Comisión Interministerial de Privatización; esto refleja cómo la burocracia va introyectando la importancia que tiene la privatización para fortalecer la modernización económica. De tal manera que a principios de los años ochenta, el gobierno maneja en su discurso la necesidad de privatizar la economía.

Si bien los militares llegaron al poder en 1964 con el apoyo irrestricto de las élites empresariales, pasado el período de auge del modelo propuesto por el régimen autoritario, el sector empresarial comenzó a manifestarse en contra de la acción

económica del Estado. Al final de 1974 los empresarios iniciaron una campaña antiestatizante que comenzó a desgastar la legitimidad del gobierno militar. Esta situación reflejó una fuerte fisura en el interior del bloque dominante que se conformó después del golpe militar a Goulart. La actitud empresarial que censuraba la intervención directa del Estado en la economía reflejaba el predominio del paradigma neoliberal, que en el contexto brasileño mantenía una característica contraria a esos postulados: un Estado interventor. El discurso empresarial que privilegia la demanda de privatizar la economía, además de redondear la aplicación del proyecto neoliberal, reflejaba que ese sector se había consolidado como clase; de ahí que los empresarios rechazaran en ese momento la tutela estatal en general, y de los militares en particular.

El efecto político de la crisis económica fue la erosión de la legitimidad de la alianza empresario-militar. En ese sentido, representa la fractura en el bloque dominante más grave desde 1964. Los empresarios ejercieron una fuerte crítica contra el "estatismo" y la conducción económica de la economía: era evidente la oposición contra el régimen. Además, junto con la reducción de los subsidios el gobierno perdió uno de sus instrumentos más importantes para garantizar el apoyo social. De tal manera que se hacía claro el repudio generalizado que los empresarios utilizaron para consolidar sus demandas de privatización.

#### c) La crisis del sistema autoritario

Si el primer gobierno autoritario, el de Castelo Branco, se propuso "sanear la economía" siguiendo las "recomendaciones" del FMI (Fondo Monetario Internacional) para contener la inflación: contención salarial, reducción de los créditos a la mediana y la pequeña industria, así como al gasto público, el desarrollo dependió en lo subsiguiente de empréstitos extranjeros. Esta situación condujo al país a contraer una deuda externa de más de 100 000 m.d.d. Es decir, que los intentos para solucionar la crisis económica no obtuvieron los resultados esperados por las élites empresariales y los militares que impulsaban los gobiernos autoritarios.

La situación económica y la política no resultaba alentadora para el bloque empresario-militar. Por lo que toca a la primera, tenemos que para 1982 la inflación alcanzó un índice de 100%, las tasas de interés uno de 300%, la deuda externa llegó a 12,600 m.d.d. (aunque para 1983 alcanzó los 80,000 m.d.d.). La producción industrial cayó en un 10% en relación con 1980, se agravó el desempleo y se redujo drásticamente la capacidad de consumo de los salarios (Martins, 1988: 138).

En lo referente a lo político, hacia 1980 se conformaba un sistema multipartidista que confirmó la intención de liberar a la sociedad. Se creaba un partido de oposición confiable, el Partido Popular (fracción del MDB que se transformó en PMDB); en ese partido se agruparon los disidentes del partido de gobierno (ex-Arena, entonces Partido Democrático Social); intelectuales de oposición y sectores católicos formaron el Partido dos Trabalhadores (PT). Por su parte, Brizola fundó el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), así como también se registró en 1981 el PDT. Todo apuntando a la contienda electoral de 1984.

Entonces, la crisis de los años ochenta condujo a Figueiredo, como también en su momento lo intentó Geisel, a esforzarse por contrarrestar los efectos sociales que produjeron las recomendaciones del FMI. La intención de esos gobiernos pretendió controlar la liberación de la sociedad brasileña, ya que el resguardar los intereses del gran capital nacional y extranjero impuso un sistema antipopular y excluyente que impidió la legitimación de los proyectos nacionales del Estado. Sumado a esto la campaña



antiestatista que los empresarios lanzaron contra la tecnocracia, hace comprensible cómo se erosionaron las bases de esos gobiernos autoritarios.

El problema fundamental de los gobiernos autoritarios fue mantener el control sobre la sucesión, que tenía por objeto garantizar que los representantes de la oposición se apoderaran del Estado. Independientemente de ello, los empresarios brasileños apoyaban la necesidad de restablecer la paz social. En ese sentido podríamos afirmar que se oponían al uso indiscriminado de la violencia, al mismo tiempo que también se opusieron al peso económico que detentaba el Estado y que desató la campaña antiestatista de mediados de los años setenta. Esta actitud empresarial fue lo que determinó el apoyo, no irrestricto, a Geisel y Figueiredo, presidentes que impulsaron: 1) el abandono gradual de la represión, 2) la apertura política (derogación del Acta Constitucional No.5) que propició la amnistía y la devolución del poder a los civiles, 3) la preservación de la ley de seguridad nacional (garantizando el control de la liberación), y 4) el condicionamiento de la opinión pública a los medios de comunicación pro-gubernamentales que, controlados por el poder económico, moldeaban la opinión pública de acuerdo con los intereses del gran capital. En ese contexto se expresaba la presencia empresarial conforme se erosionaba la alianza con el sector militar mientras que el empresario confirmaba su relativa autonomía fortaleciendo progresivamente su posición política.

En la conformación de la Nueva República en 1985 el empresariado brasileño desempeñó un papel mucho más activo que en los períodos anteriores, ya sea por medio de su organización cúpula, FIESP, o por conducto de sus diferentes líderes que incidían directamente en el escenario político. Por otro lado, a mediados de los años ochenta, los empresarios fueron adquiriendo relevancia política en puestos de elección (es el caso de Tasso Jereissati, quien salió victorioso en las elecciones para gobernador del estado de Ceará, y la amenaza electoral que representó para el PMDB, en el estado de Sao Paulo, uno de los industriales más importantes del país, Antonio Ermírio de Moraes), además de otros empresarios que llegaron a ocupar importantes carteras de la estructura ministerial, como es el caso de la Secretaría de Hacienda. Esto reflejó una nueva cultura política empresarial que se consolidó al coincidir con los criterios tecnocráticos de los regímenes autoritarios de los años ochenta. Como se demuestra en el siguiente comentario:

...Se efectuó un acercamiento de los vínculos empresariales con segmentos de una nueva tecnocracia que ocupaba posiciones centrales en el aparato del Estado, en especial durante la estructuración de las recientes reformas económicas. Se trata de una asociación dominada por los intereses ligados a la modernización capitalista del país, los cuales sin embargo, no llegan a configurar un proyecto de reconstrucción nacional (Diniz y Boschi, 1988: 310).

Una de las principales preocupaciones empresariales en torno al rumbo que habría de seguir la nación, era las referidas a la política industrial. De tal manera que a finales de 1985 y principios de 1986, las élites empresariales propusieron al Estado la creación de un Consejo Nacional de Política Industrial. Esa misma situación condujo al empresariado nacional a conformar una entidad aglutinadora de las organizaciones cúpulas empresariales; se trata de la UBE (Unión Brasileña de Empresarios). El objetivo era crear una estructura corporativa empresarial en la que se articularan las acciones de las organizaciones empresariales más importantes. Como es el caso de la ABINEE (Asociación Brasileña de la Industria Electro-Eléctrica), la ABDIB (Asociación Brasileña para el Desarrollo de las Industrias de Base) y la FIRJAN (Federación de Industrias de Río de Janeiro), entre otras.

El Plan Cruzado de febrero de 1986, que pretendía contener la inflación sin reducir la tasa de crecimiento económico provocó diferentes respuestas por parte del sector empresarial.

Mientras que organizaciones como la FIESP, ABINEE y FIRJAN, entre otras, manifestaron su apoyo a la propuesta gubernamental, organizaciones como la ACSP (Asociación Comercial de Sao Paulo) protestaron contra la congelación de los precios. Para finales de 1986, las correcciones al Plan Cruzado (II) recibieron el repudio unánime del empresariado en contra de la estructura de precios y la intención de reforzar la capacidad estatal en la recaudación fiscal. Esta situación condujo a los empresarios a una posición de "desobediencia social" encabezada por la FIESP.

La participación política de los empresarios a mediados de la década de los ochenta se verificaba por la representación de ese sector en el órgano constituyente. Su representación directa representó el 32% en esa instancia jurídica. En esos años los empresarios se propusieron, por medio de la FIESP y la CNI, que se incorporara en la nueva acta constitutiva la necesidad de establecer un nuevo orden económico. En éste se atribuiría el papel preponderante a la propiedad privada y al libre mercado, donde, obviamente, el Estado desempeñaría la función de regulador de la economía: estímulo, apoyo y fiscalía. Esto refleja el predominio de la ideología neoliberal en la cual, en términos generales, no se justifica que el Estado compita con las empresas privadas. La propuesta empresarial denota que la intervención directa del Estado en la economía, sólo es justificable en el caso de garantizar la seguridad nacional y/o cuando la iniciativa privada no cubra alguna actividad económica prioritaria.

Además de las modificaciones constitucionales que demandó el empresariado brasileño, establecieron la creación del Consejo Económico en el que participarían representantes gubernamentales, del parlamento, de los empresarios y los trabajadores. [6]

Por otra parte, en 1987, mientras los trabajadores propugnaban la instalación de una jornada laboral de 40 horas a la semana, los empresarios se manifestaron radicalmente en contra de esta demanda. La FIESP ampliaba su rechazo a la cuestión de la estabilidad en el empleo que demandaba el sector laboral. Los empresarios, por medio del presidente de la CNI, entregaban al Ministro de Trabajo la petición de prohibir la unificación sindical y la manutención de las cuotas sindicales. La intención empresarial era mantener subordinadas a las organizaciones sindicales, en la estructura corporativista, a los designios de la burocracia estatal. Esta propuesta, que representaba la corrección de un documento entregado en el año de 1985, pretendía establecer la autonomía sindical pero al mismo tiempo reconocer el derecho de decidir libremente acerca de la afiliación de los trabajadores a sus únicos órganos de representación. De hecho, el pacto social que requiere la sociedad brasileña en su tránsito a la democracia en esos momentos se ve empañado por la resistencia empresarial a reconocer la validez de las demandas de los trabajadores.

El gobierno de Sarney, que inició en 1985, evidenció la falta de compromiso de ese mandato con el proyecto de la reprivatización; de hecho se extendió la intervención estatal en áreas de microcomputadoras y software; a la vez que se mantuvieron los controles salariales y de precios como mecanismos para estabilizar la economía. Es hasta 1988 cuando se fortalece el proceso de privatización mientras que en 1989 se crea el Consejo Federal de Desestatización.

Por lo que toca al gobierno de Collor de Melo, en la medida en que no resuelve el problema de la crisis económica, sobre todo en cuanto a contrarrestar los efectos de las políticas neoliberales, su desafío político es de restablecer la credibilidad en el gobierno, así como de restituir la capacidad de gobernar, garantizar la paz social al régimen.

Por su parte los empresarios comienzan a ser conscientes de lo necesario que es, en la actualidad, resolver las necesidades inmediatas de las clases subalternas, su posición

política desde los años setenta reflejan su intención de evitar el estado de violencia que caracteriza a los regímenes autoritarios. Como lo sugiere Fiori:

La clase empresarial no desconoce este hecho y por eso, con apoyo de la opinión pública, juega sistemáticamente a favor de la interrupción de la política recesiva, sobre todo en aspectos que más le interesa, esto es, precios, impuestos e ingresos (Fiori, 1992: 191).

Como se puede observar, existen una serie de puntos en los que el gobierno encontrará la resistencia empresarial. En este caso la necesidad de fortalecer la captación fiscal impedirá que el gobierno de continuidad a su política social que en última instancia recupera la legitimidad que requiere todo Estado moderno.

### III. Los empresarios y el proyecto neoliberal en México. Un caso atípico

#### a) El agotamiento del proyecto populista

La crisis económica que enfrentaba Echeverría (1970-1976) condujo a la burocracia política a replantear la política económica. En la estrategia se privilegió el fortalecimiento del Estado en la conducción del desarrollo, por lo que apremió su fortalecimiento económico a partir de consolidar su intervención directa en la economía. De eso dependía que la burocracia política mantuviera el papel hegemónico en nuestra formación social: primero, fortaleciendo su posición financiera para continuar impulsando el modelo de acumulación, y segundo, respaldado por su recuperación económica, restituyendo el consenso con las clases subalternas a partir de continuar con las políticas asistencialistas.

Precisamente, los dos objetivos planteados por Echeverría a partir de esa estrategia, fortalecimiento financiero y restitución del consenso, fueron la causa de la importante fisura que se dio en el bloque dominante. Los empresarios mexicanos irrumpieron en el escenario político redondeando la nueva relación entre sociedad civil y Estado. La movilización empresarial en el sexenio de Echeverría está caracterizada por la activación política de sus organizaciones empresariales, [7] que culminó con la fundación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en 1975 [8] La organización cúpula aglutina a las principales organizaciones empresariales y tiene como objetivo buscar la unidad del empresariado mexicano para defender sus intereses generales. En la medida en que la iniciativa representa la radicalización general de las organizaciones empresariales, la Canacindra queda excluida del CCE por ser identificada como una organización pro-gubernamental. En los principios establecidos en ese organismo empresarial queda plasmada la ideología neoliberal que en lo sucesivo caracterizará las demandas que los empresarios hacen al Estado. [9] El conflicto tuvo una fuerte repercusión en la esfera de la política y la economía; por lo que toca a la primera, los rumores desatados por los empresarios en sus organizaciones, los medios de comunicación y en el interior de sus estructuras administrativas mermaron la credibilidad en el régimen echeverrista.

Si bien el gobierno se planteaba el restablecimiento de su capacidad financiera, incrementando su participación en la economía y aplicando una reforma fiscal, los empresarios respondían con la confrontación política y la fuga de capitales como forma de reprobación a la iniciativa estatal. A lo largo del sexenio, el gobierno de Echeverría tuvo que recurrir al endeudamiento externo para sostener el modelo de desarrollo de corte populista; el desequilibrio de la balanza de pagos y la descapitalización que provocó la fuga de capitales orillaron a la burocracia política a devaluar el peso a finales del sexenio.

La estrategia política que desarrolló el gobierno echeverrista giró en torno a la movilización-manipulación de los movimientos populares (Villa, M., 1990). La movilización

fue utilizada para confrontar la oposición empresarial, principalmente contra el activismo del Grupo Monterrey, permitiendo el ascenso del movimiento independiente y el reclamo del apoyo del sindicalismo oficial. Es decir, una relación de cooptación para obtener el respaldo político que requería el Estado en la confrontación con la burguesía nacional. La decisión de expropiar las tierras del Yaqui provocó la radicalización de los empresarios del norte. El panorama económico y político resultaba, pues, desfavorable a la burocracia política en su intención de mantenerse al frente del bloque dominante, los empresarios convirtieron la crisis económica en un conflicto político (Hernández, R., 1990). La lucha por la hegemonía daba inicio en una situación de desgaste de la capacidad política y financiera del Estado mexicano.

El gobierno de López Portillo (1976-1982) heredaba una fuerte crisis económica y una notable fisura en el bloque dominante. Se trataba de recomponer el bloque en el poder de manera ordenada y fluida, de tal manera que la reconciliación con el empresariado nacional era prioritaria para hacer viable el proyecto de desarrollo del nuevo gobierno.

La crisis obligaba al ejecutivo a reconciliarse de manera inmediata con los empresarios. En la toma de poder, el primero de diciembre de 1976, se hacía explícita la invitación a los empresarios para que participaran en la "Alianza para la Producción". [10] La respuesta empresarial se expresó en el beneplácito mostrado ante la actitud presidencial, los rumores antigubernamentales disminuyeron notablemente, así como también el activismo empresarial.

Los empresarios nacionales no respondieron, concreta e inmediatamente, a la convocatoria presidencial, situación que no tuvo mayores consecuencias para la burocracia política en la medida en que el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros garantizaban restituir el potencial financiero que le permitiría continuar guiando a la nación. De hecho, de no ser por la magnitud de divisas generadas por la explotación petrolera la apatía empresarial hubiera generado estragos al gobierno de López Portillo. El mismo boom petrolero le permitió al gobierno mexicano contener las presiones externas para que México se incorporara al GATT; por otra parte, es necesario reconocer que los recursos financieros que exigía la crisis económica llegaban también por la vía del endeudamiento externo, que en ese sexenio alcanzó la suma de 90 000 m.d.d., aproximadamente, cobertura que brindó la explotación petrolera. De haberse incorporado en el proyecto de nación las recetas que "sugería" el FMI (apertura económica, liberación de precios, adelgazamiento del aparato estatal, privatización y tope salarial), desde esos momentos se hubiera instalado en México un modelo de desarrollo de corte neoliberal. De tal forma que la única explicación viable para comprender por qué los empresarios nacionales no se unieron a la presión exterior (las sugerencias del FMI coincidían con los principios del CCE) sólo tiene explicación al observar que la política del gobierno de López Portillo, de manera general, garantizaba los intereses globales de la burguesía, por lo cual no era necesaria una presión política o económica.

En la medida en que la situación económica internacional se tornó adversa para la economía mexicana, los problemas de ese gobierno se fueron complicando. La caída de los precios del petróleo en el mercado internacional en 1981 fue la primera contingencia que marcó las limitantes para fincar las expectativas en la capacidad petrolera. En ese mismo año se dio un proceso de lucha por el poder económico entre la fracción financiera: especulación financiera, dolarización de la economía, fuga de capitales, etc., que finalmente sirvieron como el detonador que obligó al gobierno a devaluar el peso mexicano en febrero de 1982. El desorden financiero provocado por las instituciones financieras privadas, principalmente, fue la justificación del ejecutivo para nacionalizar la banca el primero de septiembre de 1982. Los empresarios nacionales, en lugar de reconocer que la medida de la nacionalización era un recurso financiero para restablecer

el orden, tomaron la solución como una medida que probaba el autoritarismo del Estado mexicano y que afectaba los intereses concretos del conjunto de la burguesía nacional.

Por esto mismo, la nacionalización de la banca representó el quiebre en el bloque dominante, en la organicidad entre modelo de acumulación y pacto político (Garrido, C., 1987). La nacionalización de la banca afectó a la fracción de la burguesía económicamente más poderosa. La incapacidad de los empresarios para dar una respuesta, más allá de las protestas en los medios de comunicación masiva, hizo factible considerar al empresariado como un gigante económico y un enano político. [11] Lo interesante de esta afirmación es que considera el análisis retrospectivo de las relaciones entre el Estado y los empresarios, donde la presencia política de los segundos a finales del sexenio de López Portillo se reducía, prácticamente, al activismo de sus organizaciones empresariales. La nacionalización de la banca marca el momento político en el que la burocracia política ve cuestionada su hegemonía al provocar la fisura en el bloque dominante. En lo sucesivo se podrá observar la coherencia en la relación entre el poder económico y el político: los empresarios emergen como gigantes económicos y como gigantes políticos.

#### b) La alianza empresarios-tecnocracia. El proyecto neoliberal

La llegada de De la Madrid a la presidencia de la República (1982-1988) estuvo nuevamente amenazada por una crisis económica y por la falta de confianza del empresariado en la viabilidad del proyecto de nación que impulsaba el gobierno mexicano. El peso de la deuda externa hacía más conflictiva la conducción de la economía, al grado que se tuvo que declarar una moratoria por un lapso de seis meses al principio del sexenio. Además, el efecto de la nacionalización de la banca tuvo una fuerte repercusión en el manejo político del nuevo gobierno. La falta de cooperación de los empresarios en el ámbito económico representaría el principal obstáculo para impulsar el proyecto de gobierno.

Sin duda, la reconciliación con el empresariado era el principal desafío político para el Estado, por esto mismo es comprensible la oferta del gobierno de De la Madrid, primero, respecto a la promesa de privatizar el 34% de la banca, el abrir la posibilidad de generar una banca paralela (en la que evidentemente participarían los empresarios nacionalizados), la venta de los activos no financieros de la banca nacionalizada y el reconocimiento que se hacía en el Programa Nacional de Desarrollo (1983-1988) a la importancia del sector empresarial en el desarrollo de la nación.

Aun así, con la evidencia de que el ejecutivo garantizaba tomar las medidas pertinentes para restablecer la confianza empresarial en el régimen, el nuevo fenómeno que se va a presentar en la actitud política de los empresarios nacionales es el de la diversificación de su activismo político (Montesinos, R., 1991). La movilización de las organizaciones empresariales, la articulación con la sociedad civil y la actividad partidaria, que a principios de los años ochenta se da en el Partido de Acción Nacional (PAN), a partir de 1987, en vísperas de la campaña presidencial de 1988 se comienza a dar abiertamente en el partido oficial: el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En las condiciones económicas en que se encontraba el país (deuda externa, déficit presupuestario, bajos precios internacionales del petróleo, etc.) el PND establecía la relevancia que tenía la participación del empresariado, pero también redefinía las áreas económicas en las que el Estado podía intervenir legalmente. Es decir, que el reconocimiento oficial acerca de la crisis económica por la que atravesaba el país, así como el establecer que la intervención del Estado se habría de restringir a la áreas prioritarias, planteaba el primer avance en lo que más tarde aparecería como la reforma

del Estado (Salinas, C., 1990). La modificación de los artículos 25 y 28, principalmente, ratificaban la decisión política de transformar la función del Estado; la recuperación de la confianza no se hizo esperar, aunque con la experiencia del sexenio anterior, las organizaciones empresariales mantuvieron su presencia en los medios de difusión masiva. Es decir, que por medio del discurso, los empresarios fueron formando una corriente de opinión (opinión pública) que poco a poco parecía hacer suyas las demandas empresariales. [12]

La acción de las organizaciones empresariales sólo fue una arista de la acción global de la derecha en México a partir de la nacionalización de la banca; aunque existió una clara decisión presidencial de reivindicarse con el sector empresarial, éstos comenzaron a aliarse de manera más estrecha con el resto de los sectores más conservadores de la sociedad, a saber, el Partido de Acción Nacional, la Iglesia y diversas asociaciones civiles que comparten los principios de la derecha mexicana, entre ellos se encuentran Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana, Movimiento Familiar Cristiano, Frente Cívico de Participación Ciudadana, etc. (Pérez Rayón, Carrillo, de la Torre y Loyo, 1991: 128).

Más aún, el gobierno de De la Madrid continuaba refrendando su decisión de renovar verdaderamente el modelo de desarrollo del período posbélico, respondiendo así a las demandas del sector empresarial: 1) ajuste presupuestario, 2) liberación de la economía, 3) apoyo financiero, 4) reprivatización de la economía y 5) salarios moderados (Montesinos, 1992). Fundamentalmente, ese gobierno trabajó la línea del ajuste presupuestario, la liberación de la economía que se consolida con la adhesión al GATT en 1987, la política de tope salarial que se mantuvo como constante en ese sexenio y, sobre todo, la reprivatización de la economía. Aunque en este último punto haya predominado más el manejo político-ideológico tendiente a consolidar la confianza del empresariado, en la medida en que la reprivatización de las empresas paraestatales era aparatosa en términos de volumen formal del sector, como señalan Romero y Méndez, mas no por el peso económico que detentaban. [13] Sin embargo, la política reprivatizadora junto con la apertura de la economía sentaban las bases para la incorporación de un nuevo proyecto de nación en cuyo modelo de acumulación la relevancia económica del Estado se modificaba, transitando a un nuevo modelo de desarrollo de corte neoliberal. La sociedad transitaba, en términos más concretos, hacia un sistema social en el que la política poco a poco se fue subordinando a las necesidades del mercado.

De hecho, el avance de un nuevo proyecto, si bien restablecía las relaciones del Estado con los empresarios, reflejó los efectos negativos de la nacionalización de la banca, que dio sus primeros frutos en los procesos electorales en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. El propósito de la acción empresarial después de 1982 era evitar que el Estado afectase nuevamente, por la vía de la política económica, sus intereses de clase. La inserción de los empresarios en el sistema de partidos superó el alcance político de sus organizaciones cúpula en su función de grupos de presión. Los empresarios cerraron la mancuerna entre la representación de sus organizaciones y la representación política del PAN. Por otra parte, se ha de reconocer que la participación de los empresarios en el PAN, si bien representaba la manifestación radical de su sector ante el autoritarismo estatal de los dos últimos sexenios, también representaba las contradicciones en el interior del empresariado mexicano. Al mismo tiempo, estos empresarios, entre los que destacan Clouthier y Clariond, reflejaban el respeto de la legalidad al sujetarse a la confrontación electoral. Evidentemente la incursión política del ala radical de los empresarios representó, en el corto plazo, al siguiente sexenio, una estrategia que rebasa el objeto tradicional de su activismo. Su participación partidista denotó su decisión de buscar en lo sucesivo el poder, y no tan sólo, la defensa de sus intereses económicos.

Entonces, la fuerte contienda electoral que evidentemente libraría el PAN en el norte del país, a mediados de los años ochenta, era reflejo del fortalecimiento de la derecha mexicana, producto de la capacidad financiera que le redituó la participación directa de los empresarios.

No obstante que la participación del ala radical de los empresarios en el PAN fortaleció relativamente la oposición de derecha, el resto de las élites empresariales respaldaron al gobierno en su proyecto de transformación económica. El caso más relevante es la firma del Pacto de Solidaridad Económica a finales de 1987; ahí el Estado aparecía como el gran concertador de los intereses globales de la sociedad mexicana. La firma del pacto estaba respaldada por el presidente del CCE, Agustín Legorreta (ex-propietario de Banamex), y el presidente del Congreso del Trabajo, el legendario Fidel Velázquez, es decir, la máxima representación de las élites empresariales y la representación formal del sindicalismo mexicano. Sin duda, la firma del pacto representaba una nueva forma de hacer política de los empresarios; ya no se trataba de la consulta, prácticamente privada, a partir de las organizaciones empresariales, sino de un acuerdo público, y por tanto de respaldo empresarial al Estado mexicano. Esto rebasa la participación de los empresarios en partidos de oposición al establecer vínculos de participación estrecha con la tecnocracia. Más tarde se pasaría a otra etapa de la relación, de la participación limitada a la participación política directa en el partido oficial.

En este contexto, el desafío político del gobierno mexicano contemplaba el posible fortalecimiento del PAN, la situación invitaba a los estudiosos de la transición mexicana a pronosticar el paso al pluripartidismo. La fisura que provocó la salida de la corriente democrática del PRI y la posterior conformación del Frente Democrático Nacional (FDN), inyectó mayor presión al proceso de la sucesión. Las señales permitían mantener las esperanzas acerca de la posibilidad de modernizar el sistema político, pasando al pluripartidismo y, por tanto, democratizando a la sociedad.

## TEXTO

Los resultados de las elecciones de julio de 1988 alteraron la relación entre el partido oficial y la oposición (casi el 51% para el PRI, el 31% para la izquierda cohesionada en torno al FDN, y el 17% a la derecha partidista representada por el PAN). Esto permitió hablar del fortalecimiento de la oposición, del paso de una oposición formal a una real, situación que sugería la democratización de la vida política. Aunque el fraudulento manejo del proceso electoral restó legitimidad al gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994), la nueva correlación de fuerzas entre los principales partidos políticos hizo pensar, una vez más, en la viabilidad de modernizar la vida política de la sociedad mexicana (Gómez Tagle, S., 1990).

El desafío para el nuevo gobierno giraba en torno a un aspecto económico y otro aspecto político referido a la pérdida de legitimidad; en ese mismo ámbito, el gobierno contaba con un excelente respaldo empresarial que de alguna manera garantizaría que la imagen presidencial no empeoraría. De tal manera que la tarea para cumplir era restablecer la legitimidad al nuevo gobierno y por tanto al modelo de desarrollo propuesto.

Entonces, primero es necesario analizar los efectos políticos en las relaciones entre el gobierno y los empresarios que tuvieron los resultados de las elecciones presidenciales de 1988. Particularmente, la sorpresa electoral de la izquierda y, en general, la nueva situación de la oposición en la cámara legislativa que definió una nueva relación en el sistema de partidos. El éxito político electoral del PAN que se pronosticaba para ese año, rápidamente se esfumó ante el fortalecimiento coyuntural del FDN. El ascenso de la izquierda representó un cuestionamiento para el proyecto neoliberal que cohesionaba a la

tecnocracia y las élites empresariales, por lo que se hacía necesario propiciar el fortalecimiento del gobierno, que en los hechos concretos impulsaba un modelo de desarrollo que respondía a los intereses de las élites empresariales.

En ese sentido, la afirmación acerca de que los empresarios se retiran del escenario político en cuanto el gobierno mantiene un proyecto, fundamentalmente económico, afín a sus intereses de clase tendría que matizarse a partir de la nueva conducta de los empresarios en el sistema político; es decir, que si la participación del ala radical empresarial en el PAN les redituó cierto prestigio político, también era cierto que la oposición no les garantizaba la participación en la toma de decisiones acerca de las políticas estatales. De esa manera en la primera mitad del sexenio salinista, y conforme se acercaba la víspera de la elecciones de 1991, fue tomando forma la participación de los empresarios mexicanos en el partido oficial. Así se fortalecía la nueva relación empresarios-Estado.

Evidentemente, la consolidación del bloque dominante comenzó a tomar forma en el sexenio anterior y estuvo determinado por el avance cualitativo del proyecto neoliberal. Un proyecto a la medida de los empresarios que permitió recuperar las cuotas de ganancia de las élites empresariales representaba la mejor justificación para respaldar en todos los terrenos la gestión del gobierno mexicano. Más aún, el hecho de que Salinas de Gortari replanteara el populismo que tanto provocó la crítica de las organizaciones empresariales, fue entendido como la necesidad de generar consenso, de legitimar la reforma del Estado que posibilitaría la consolidación del nuevo modelo de desarrollo en el que la preponderancia económica correspondería a la empresa privada. Así, con el apoyo de las élites empresariales, el manejo populista del proyecto neoliberal (el programa de Solidaridad que sustenta el carácter social -liberalismo social-) y con el respaldo del gobierno norteamericano, el gobierno salinista se perfila a refrendar su legitimidad en las elecciones de 1991.

En esas elecciones el PRI recuperó su hegemonía en la cámara legislativa al obtener el 60% de las votaciones totales; esto le permite al Estado hacer las reformas constitucionales a los artículos 3,27,123 y 130 para posibilitar la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo donde el Estado asume el papel de gestor global de la economía.

El proyecto salinista responde a los intereses empresariales y los incorpora en los aparatos de Estado en los que participan directamente en la toma de decisiones, [14] y no les exige el menor interés en la defensa de la democracia, sobre todo si ésta atenta contra la estabilidad del régimen salinista; es decir, que la misma naturaleza del proyecto neoliberal con sentido social exige la acción autoritaria del Estado, lo cual constituye la limitante principal para la democratización del sistema político. Lo que es de vital importancia para la tecnocracia y las élites empresariales es el asegurar el control del proceso electoral para 1994 con el objeto de garantizar la continuidad del proyecto neoliberal (Ramírez, C. 1992), aunque en el corto plazo se continúe afectando los intereses de las clases asalariadas. La legitimidad estará basada, entonces, en la capacidad de generar consenso con el programa de Solidaridad y la imagen presidencial que logren proyectar tanto la tecnocracia como las élites empresariales a partir del manejo de la opinión pública.

Al parecer, por lo que toca a la relación de las élites empresariales y la tecnocracia, el punto que está causando problemas en la relación entre la tecnocracia y el empresariado nacional en la primera mitad de 1992 es la cuestión de la política fiscal. Esto es lo que podría generar conflicto entre los dos sectores, y de hecho puede constituir la principal contingencia que enfrenten los precandidatos del partido oficial. La disposición de la



tecnocracia a negociar el sentido y dimensión de la PF es lo que definirá el apoyo a uno u otro candidato.

La resistencia empresarial a la modernización fiscal es el elemento que puede retrasar la modernización económica que exige esa fuente de recursos financieros al nuevo Estado mexicano. Ya desmovilizadas las masas populares, los empresarios tienen la posibilidad de hacer valer su opinión sobre la reforma fiscal; evidentemente esto irá en contra de la política de solidaridad con los sectores marginales, dificultando la cooptación que requiere la tecnocracia para garantizar la legitimación de su proyecto.

#### IV. Comentario final

El primer comentario es que el caso brasileño se puede clasificar como un caso tipo, mientras que el mexicano como uno atípico. Evidentemente, si el neoliberalismo se traduce, exclusivamente, en términos de la aplicación de políticas económicas que ponen término a un modelo de desarrollo en el que la intervención del Estado en la economía es determinante, al mismo tiempo que la economía se mantiene prácticamente cerrada hacia el exterior (por la vía arancelaria) no se tendría que hacer una distinción en términos de casos tipo. La diferencia fundamental para los casos de Brasil y México estaría determinada, primero, por el papel que juegan los militares en la instalación del proyecto neoliberal y, segundo, por los tiempos en que se incorporan dichos proyectos. Mientras que Brasil abre el período de militarización de las sociedades latinoamericanas, que se generaliza en los años setenta, México queda excluido de la generalización. La excepción confirma la regla. Mientras en América Latina predomina el paradigma neoliberal desde esos años, la consistencia económica y social de México le permite prolongar el modelo de desarrollo "populista" hasta principios de los años ochenta. En esa década se instrumenta una política neoliberal sin la utilización abierta de la violencia. Por este factor y el destiempo en relación a los otros países latinoamericanos que incursionaron en el neoliberalismo, México puede considerarse un caso atípico. Pero, en esencia, en la medida en que lo económico predomina sobre el resto de los ámbitos de la sociedad, tanto Brasil como México conforman la generalidad.

Es evidente que, considerando la especificidad de cada cultura política, la ausencia de los militares en el poder en el caso mexicano no constituye una diferencia que impida detectar las semejanzas del proyecto neoliberal en esos países. En uno y otro caso, la aplicación de las políticas neoliberales ha generado una situación excluyente de las clases subalternas. Si lo económico va predominando sobre los otros ámbitos de la sociedad, lo importante, en la perspectiva de este trabajo, es advertir que los empresarios adquieren un papel preponderante en el campo de la política.

Respecto a la democracia, aunque la naturaleza del neoliberalismo latinoamericano exija su limitación, es de observarse que los efectos del autoritarismo brasileño han provocado la permanencia de la movilización social, amenazando la capacidad de conducir a la nación a los diferentes gobiernos. Por tanto, la democracia no se puede excluir ni postergar. Mientras, en el caso mexicano, por la capacidad del Estado para desmovilizar a las clases subalternas, la democracia se sujeta a la necesidad imperiosa de la modernización económica; la postergación de la democracia ha sido decisión del ejecutivo. Decisión evidentemente avalada por la tecnocracia y las élites empresariales.

Ante esta misma situación, el empresariado brasileño, cada vez más consciente de los efectos negativos que ha dejado la política neoliberal, poco a poco va adoptando una actitud más negociadora, en la que se comienza a reconocer la autenticidad de las demandas populares. En el caso mexicano, los empresarios no se preocupan por la situación de los asalariados, con la conciencia de que difícilmente esto provocaría una

movilización social que pusiera en riesgo el proyecto neoliberal que respalda de manera concreta e inmediata sus intereses de clase.

En cuanto a la situación económica, el gobierno de Collor de Melo no parece contar con los recursos económicos ni políticos para restituir a la sociedad la certidumbre en el corto plazo. Aunque el empresariado de su país es mucho más competitivo que el mexicano, las condiciones de la reordenación económica internacional no parecen favorecer a la economía de su país. Su gobierno enfrenta el problema de la credibilidad. Mientras que en el caso del gobierno de Salinas de Gortari, las condiciones de la globalización de la economía internacional parece totalmente favorable para propiciar la certidumbre en el corto y largo plazo.

En cualquiera de los dos casos, los gobiernos requieren urgentemente de la comprensión de los empresarios nacionales en el avance de una reforma fiscal que permita darle continuidad a la política social. De ello depende el control de las sucesiones; los "éxitos" económicos tendrán que reflejarse en lo inmediato en la mejoría de las condiciones de vida de las clases subalternas.

CITAS:

[\*] Profesor-Investigador Departamento de Sociología UAM-A.

[1] Nótese que no se trata de una crisis política, económica o ideológica, puesto que cualquiera de esos niveles puede contemplar soluciones atinentes a la particularidad de cada uno de ellos. La idea del caos tiene mayor significación que la crisis, puesto que hace referencia a una catástrofe social en el que resulta urgente una solución inmediata. Como lo sugiere Huntington, los militares emergen como la única alternativa viable para garantizar el restablecimiento del orden.

[2] Es evidente que al instalarse el estado de emergencia se anula el ejercicio de la democracia. por lo que el sistema político se ve transtornado, pero la situación resulta transitoria en la justificación que presentan los militares. De tal manera. que cuando nos referimos a los cambios políticos o económicos que definen la modificación de un modelo de desarrollo (que entendido de manera global se refiere a lo político, económico y social) el efecto inmediato se registra de manera perceptible, más en lo económico que en lo político-ideológico.

[3] Foxley, Alejandro. Experimentos neoliberales en América Latina, F.C.E., México. 1988. En este trabajo el autor define las características principales del proyecto neoliberal, a partir de la experiencia latinoamericana en el período en que se instalan proyectos de ese tipo en América Latina. Su planteamiento general adquiere mayor relevancia cuando toca el caso chileno que es presentado con mayor detalle que los casos de Argentina, Brasil y Uruguay.

[4] French-Davis. Ricardo "Esbozo de un planteamiento neoestructuralista". Revista Cepal Num. 34 Santiago de Chile. En este artículo, si bien el objetivo que persigue el autor es caracterizar las propuestas neoestructuralistas, también se presentan las características del proyecto neoliberal. Así el autor nos facilita la distinción de uno y otro paradigma.

[5] 1) La reducción del tamaño del sector público, la reorientación del excedente hacia el capital privado, la apertura de la economía (liberación de la economía), etc., con el objeto de controlar la inflación, que en la interpretación monetarista (neoliberal) refleja la crisis estructural de la economía.

[6] Diniz y Boschi señalan cómo en la Comisión del Orden Económico predominaron las propuestas neoliberales en la medida en que importantes empresarios formaban parte de esta instancia de consulta gubernamental. Es el caso de Delfim Neto, presidente de la comisión (antiguo Ministro de Hacienda en los anteriores gobiernos militares), así como la participación del diputado Guilherme Afif Domingos (PL-SP destacado líder empresarial), el senador Albano Franco (PMDB-SE. presidente de la CNI) y los empresarios Antonio Ueno (PFL-PE), Rubén Medina (PFL-RJ). Marcos Lima (PMDB-MG).

[7] En la reconfiguración del partido oficial en 1945 en la que termina adoptando el nombre de Partido Revolucionario Institucional, se definen los tres sectores que constituyen las bases sociales del partido. Ahí queda claro que, al menos en el partido hegemónico quedan excluidos los empresarios de tal forma que su participación política en el ámbito público se reduce a la manera en que sus organizaciones empresariales se insertan en el sistema político o por su acción partidaria en la oposición, evidentemente de derecha.

[8] El Consejo Coordinador Empresarial se conforma por las siguientes organizaciones empresariales: Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco) fundada en el año de 1917 por iniciativa de ley, Confederación de Cámaras de la Industria (Concamin) fundada en 1918 por iniciativa de ley; Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) fundada en 1929 por iniciativa empresarial; Asociación de Banqueros de México (ABM) fundada en 1928 por iniciativa de ley esta asociación fue sustituida a partir de la nacionalización de la banca en 1982 por la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa (AMCB)-; Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis) fundada en 1946 por iniciativa de ley; Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (AMHN) fundada en 1962 por iniciativa empresarial -inicialmente agrupaba a los 30 capitalistas nacionales más importantes-; y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). La Cámara Nacional de la Industria (Canacintra) se fundó en 1941 por iniciativa de ley; pertenece a la Concamin, pero fue excluida del CCE por ser identificada como un organismo empresarial pro-gubernamental.

[9] Valdez, Francisco. "La acción política empresarial y la transición estatal en México" en Arturo Anguiano en La Modernización de México, UAM-X, México, 1990. En este trabajo el autor señala: "...el CCE enfatizaba la necesidad de comenzar una reforma neoliberal de la intervención estatal y del control político, resumidas en las ideas de 'privatización' y modernización'. La primera postulaba una enorme reasignación de recursos económicos hacia los grupos económicos más poderosos y la segunda, el debilitamiento y desmantelamiento de los nexos entre el gobierno y los trabajadores, tanto como con los grupos burocráticos no modernos" (p. 229).

[10] Montesinos Rafael "La cultura política del empresariado en México Sociológica Núm. 17. septiembre-diciembre 1991. En este trabajo se destaca que la intención de López Portillo no se redujo a una retórica sino que de manera, concreta ofreció concesiones a los grupos más poderosos. Es el caso del Grupo Monterrey con el que inició conversiones muy importantes como el del desarrollo turístico de Las Hadas en Manzanillo.

[11] Arriola Carlos. Los empresarios y el estado 1970-1982. UNAM-Porrúa, México, 1988. Sin lugar a dudas este trabajo del autor representa la referencia obligada a los estudiosos en la temática de empresarios en México. La frase que se toma de ese libro "gigantes económicos, enanos políticos" se debe a que el análisis prácticamente culmina en el contexto histórico de la nacionalización de la banca. Hasta ese suceso, efectivamente habría que reconocer que la preponderancia política de los empresarios no es la que ellos detentan en la segunda etapa de la transición, según nuestra interpretación, en el período 1983-1992

[12] Un ejemplo de que el empresariado mexicano se daba a la tarea de generar corrientes de opinión que reflejaran la ideología empresarial, son los anuncios en la televisión del Consejo Nacional de la Publicidad, en los cuales se difundía la imagen de que Todos somos iniciativa privada, la necesidad de mantener la unidad nacional o los beneficios que traerá la firma del Acuerdo de Libre Comercio.

[13] Romero, Miguel y Luis Méndez . "La restructuración de la industria paraestatal" en Rosa Albina Garabito y Augusto Bolívar (coord.) México en la década de los ochenta. La Modernización en cifras, UAM-A, México, 1990. En este trabajo los autores señalan, considerando la información oficial, que de las 1216 empresas que permanecían en la tercera etapa del sexenio de De la Madrid, 722 fueron desincorporadas, es decir, un 60% aproximadamente, del porcentaje total de empresas. También sugieren que ese porcentaje representa el volumen de las empresas paraestatales que a la vista funcionaban con un alto grado de irracionalidad administrativa.

[14] Rodríguez José I. "Nuevo empresariado la política como inversión" Este país, Núm. 10 enero 1992. En este trabajo el autor señala Miembros de la comisión de Financiamiento y Fortalecimiento Patrimonial del PRI con cuyos fondos se cubrieron en parte los gastos de la campaña electoral de CSG; estos empresarios son hoy los propietarios de diversas paraestatal que fueron privatizadas o recibieron concesiones para prestar servicios anteriormente reservados en exclusiva al Estado. Amparados en la certeza de que la política es una buena inversión, estos empresarios priístas han resultado beneficiados con el adelgazamiento del Estado en áreas que perdieron su carácter de prioritarias o estratégicas, como resultado del proyecto de modernización impulsado por el gobierno. Así han adquirido el monopolio del servicio telefónico, líneas aéreas, compañías mineras, enlatadoras, ingenios, productoras de acero, entre muchas otras" (p. 2).

#### BIBLIOGRAFIA:

Bambirra, Vania (1990). "El estado en Brasil: del dominio oligárquico a la 'apertura controlada'" en Pablo González Casanova (coord.), El estado en América Latina. Teoría y práctica., Siglo XXI-UNU, México.

Cardoso, Fernando H. (1991) "Diversos caminos, distintos países" en Fernando Calderón y Mario R. Dos Santos. Hacia un nuevo Orden estatal en América Latina. Veinte Tesis sociopolíticas y un corolario, Clacso-FCE, Chile.

Cardoso, Fernando H. (1988). "Los empresarios y el proceso de transición: el caso brasileño" en Guillermo O'Donell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (Comps.) Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas comparadas. 3, Paidós, Argentina.

Cardoso, Fernando H. (1985). "Los partidos políticos y la participación popular en un régimen de excepción" en Julio Labastida Martín del Campo (Coord.) Hegemonía y alternativas políticas en América Latina, IIS-UNAM Siglo XXI, México.

Castro, Regis De (1985). "Política social y normalización institucional en el Brasil" en Julio Labastida Martín del Campo (Coord.) Hegemonía y alternativas políticas en América Latina, IIS-UNAM, Siglo XXI, México.

Diniz, Eli y Boschi, Renato R. (1988). "Empresarios y Constituyentes: continuidad y rupturas en el modelo de desarrollo capitalista en el Brasil" en Celso Garrido (coord.) *Empresarios y estado en América Latina*, CIDE-FFE-UNAM-UAM (A), México.

Fiori, José Luis (1992). "Poder e credibilidade: o paradoxo político da reforma liberal", *Lua Nova*, Núm 25, Brasil.

Foxley, Alejandro (1988). *Experimentos neoliberales en América Latina*, FCE. México.

Fukuyama, Francis (1992) *La fin de l'histoire et le dernier homme*, Flammarion. Francia.

Garrido C., Edmundo Jacobo y Enrique Quintana (1987). "Crisis y poder en México: un ensayo de interpretación" *Estudios Sociológicos*, núm. 15, sept-dic. México.

Gómez Tagle, Silvia (1990). "Los votos de la transición democrática de México" en *México en el umbral del milenio*, COLMEX, México.

Huneus, Carlos (1986). "Autoritarismo, cuestión sucesoria y transición a la democracia: España, Brasil y Chile", *Opciones*, Núm. 8, enero-abril, Santiago de Chile.

Hernández, Rogelio (1990). "La conducta empresarial en el gobierno de Miguel de la Madrid", *Foro Internacional* No. 120 abril junio.

Lamounier, Bolívar (1988). "Apertura a través de elecciones: ¿será Brasil un caso paradigmático", *Revista Opciones*, Núm. 14, mayo-agosto, Santiago de Chile.

Martins, Luciano (1988). "La liberación del gobierno autoritario en Brasil" en Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (comp) *Transiciones desde un Gobierno autoritario. América Latina*, Paidós, Argentina.

Montesinos, Rafael (1992) "Transición y poder empresarial en México", Ponencia presentada en el V Encuentro Nacional de Investigadores sobre Empresas y Empresarios en México, Comecso-U. de Colima. Marzo de 1992, Colima.

Montesinos, Rafael (1990). "Fuerza de trabajo y TLC", *Topodrilo*, Núm 19, septiembre octubre, UAM-I, México.

Montesinos, Rafael (1991). "La cultura política del empresariado en México", *Sociológica*, Núm. 17, UAM-A, México.

Montesinos, Rafael (1992). "El discurso empresarial en 1985" en Ricardo Tirado y Cristina Puga (Coords.). *Los empresarios ayer y hoy*, COMECOSO-UNAM-UAM(A)-Caballito, México.

Pérez Rayón, Nora, Carrillo A., De la Torre V., Loyo M. (1991). "La derecha en México (1982-1990). Continuidades y rupturas", *UAM-A, Sociológica*, Núm. 15, enero-abril, México.

Ramírez, Carlos (1992). "El conflicto por la democracia", *Topodrilo* Núm. 22, enero-febrero, México.

Salinas, Carlos (1990). "Reformando al Estado", *Nexos*, Núm. 148, abril.

Schneider, Ben R. (1990). "La política de privatización en Brasil y México: variaciones sobre un tema estatista", Foro Internacional, Núm. 121, julio-septiembre, México.

Velasco, Sebastiao C. (1988). "Doce años después: el antiestatismo en el discurso del empresariado brasileño" en Celso Garrido (coord.). Empresarios y estado en América Latina, CIDE-FFE- UAM-UAM-(A), México.

Villa, Manuel (1990). "Cambios en las relaciones sociedad-Estado y sus tendencias futuras", México en el umbral del milenio, COLMEX, México.